



**NEOLIBERALISMO
RAMPANTE**



Colombia 2030: La estrategia del BID para profundizar el despojo

5

CAROLINA JIMÉNEZ M.

DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

El pasado 17 de febrero el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- presentó la estrategia que se debe implementar en el país para alcanzar un crecimiento sostenido. El documento titulado *"Colombia. Hacia un país de altos ingresos con movilidad social"* propone una serie de medidas de política pública a través de las cuales se podría elevar el nivel de productividad, fortalecer las instituciones y mejorar la movilidad social.

El núcleo central de esta propuesta radica en generar las condiciones para que el país aumente su nivel de ingresos. Esto es, dinamizar un incremento del PIB per cápita de US\$12.000 a US\$30,000. Y consolidar una clase media que se aproxime al 70% de la población.

Para lograr este objetivo la economía requiere crecer al 6% anual, similar a la tasa de países asiáticos. Estas tasas de crecimiento se pueden alcanzar aumentando la inversión pública anual del

Una aproximación a la propuesta estratégica elaborada por el BID nos devela que su preocupación fundamental no radica en generar las condiciones para romper los esquemas de desigualdad social, factores explicativos de la inmovilidad social. Se trata de impulsar una serie de reformas favorables para soportar los procesos de acumulación de un capitalismo en crisis.



3.5% actual hasta el 7% del PIB, para lo cual es necesario incrementar los recursos fiscales de los que dispone el país¹.

Así las cosas, la agenda de crecimiento propuesta se soporta en un gran pacto fiscal que permita aumentar los recursos tributarios y lograr las metas de inversión pública (BID, 2016). Ahora bien, una aproximación a la propuesta estratégica elaborada por esta institución nos devela que su preocupación fundamental no radica en generar las condiciones para romper los esquemas de desigualdad social, factores explicativos de la inmovilidad social. Se trata de impulsar una serie de reformas favorables para soportar los procesos de acumulación de un capitalismo en crisis. A continuación se presentan algunas ideas fuerza que soportan esta afirmación.

Reforma tributaria: Todos ponen

¹ BID (2016), Colombia. *Hacia un país de altos ingresos con movilidad social.*

El aumento de la recaudación tributaria es el soporte del crecimiento económico (BID 2016).

La reforma propuesta por el BID pretende incrementar los ingresos tributarios del gobierno en seis puntos del PIB. Esto es, pasar del 17% al 23%. El eje de la reforma es la ampliación de la base tributaria a través de generar más impuestos al consumo y de los prediales. Al decir de Luis Alberto Moreno: "No puede seguirse pretendiendo que un grupo pequeño de empresas aporten, mientras millones de personas no lo hacen. Antanas Mockus lo dejó claro con su pirinola: ¡todos ponen!"².

² Luis Alberto Moreno, 2016. Revista *Semana*, febrero 2 de 2016. "Llevamos demasiado tiempo concentrados en lo que nos divide y no en lo que nos une". Luis Alberto Moreno. En: <http://www.semana.com/nacion/articulo/bid-luis-alberto-moreno-y-plan-colombia-2030/460457>



Paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977

Así las cosas, no se trata una reforma que castigue las ganancias del capital. Todo lo contrario, se trata de que la clase trabajadora colombiana sostenga el incremento de los ingresos gubernamentales, los cuales estarían destinados a mejorar las condiciones de competitividad económica de un patrón de acumulación soportado en la precarización de la fuerza de trabajo, el deterioro del mercado interno y el agotamiento de la capacidad entrópica de nuestra naturaleza.

Esta orientación tributaria estaría a tono con los objetivos de la regla fiscal, esto es, aquella que asegura que los gastos estructurales del gobierno no superen sus ingresos.

Inversión pública: Superar las brechas de infraestructura

Para impulsar el crecimiento sostenido de la economía colombiana se requiere de un aumento significativo de la inversión pública en el sector de infraestructura (BID, 2016).

Para impulsar el desarrollo económico del país se requiere mejorar las condiciones de acceso a los territorios a los diferentes agentes económicos interesados en desplegar procesos de inversión. Así las cosas, la inversión pública estaría destinada a financiar un gran programa infraestructural que mejoraría las brechas cuantitativas y cualitativas de infraestructura en transporte y desarrollo urbano. El propósito sería un incremento de la inversión del gobierno del 3,6% del PIB al 7% anual.

En este sentido, el aumento del gasto público no estaría orientado a mejorar las condiciones socioeconómicas del grueso de la población colombiana en dramáticas condiciones de precarización. Todo lo contrario, contribuiría a acentuar su condición de inmovilismo social, en tanto la castiga aumentando su base tributaria y reduciendo el gasto en política social.

Política social: Desprotección social

Ampliar la cobertura de los programas de transferencias y mejorar la focalización hacia los pobres extremos, particularmente en áreas rurales (BID, 2016).

Para el BID los programas de transferencia condicionada han jugado un papel determinante en reducir los indicadores de pobreza en la región. Para continuar en esta dirección se propone ampliar la cobertura de los programas y mejorar la focalización hacia la población en condición de pobreza extrema. Así las cosas, no se trataría de cambiar un enfoque de política social ampliamente problematizado por no generar las condiciones para alcanzar la igualdad social.

[.] las políticas de focalización que progresivamente sucedieron a las políticas de atención universal en la prestación de servicios no tienen una sostenibilidad en el tiempo. Aparecen como políticas inestables, que apuntan a la

*distribución de bienes y servicios puntuales, pero no responden a un plan de intervención integral sobre la población más pobre*³.

Otro elemento problemático de la estrategia propuesta, consiste en reducir el costo fiscal que se desprende de los subsidios al agua. Al decir de esta institución, estos subsidios representan el 0,05% del PIB, gasto que podría ser utilizado en mejorar las condiciones de competitividad de la economía colombiana. Así las cosas, se allana cada vez más el camino al desconocimiento del acceso al agua como derecho fundamental.

Reforma pensional

Mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones elevando los años de cotización y aumentando la edad de jubilación (BID, 2016).

El aumento del gasto público no estaría orientado a mejorar las condiciones socioeconómicas del grueso de la población colombiana en dramáticas condiciones de precarización. Todo lo contrario, contribuiría a acentuar su condición de inmovilismo social, en tanto la castiga aumentando su base tributaria y reduciendo el gasto en política social.

El documento señala que el costo fiscal de las pensiones en Colombia es poco eficiente. El gasto en el sistema de pensiones público equivale al 3,8% del PIB y cubre tan solo al 33% de la población en edad de jubilarse. Para corregir esta situación se propone elevar

el período de contribuciones al sistema en 10 años y aumentar la edad de jubilación de las mujeres en 5 años y de los hombres en 3. Esto representaría un ahorro del 0,5% del PIB.

Esta propuesta reproduce las inequidades que caracterizan el sistema general de pensiones en Colombia. Pues, entre otras cosas, castiga el salario y años de vida de los trabajadores y no genera dispositivos de control a las ganancias exorbitantes que la banca privada recibe del sistema.

Estos son, entre otros, algunos de los núcleos más problemáticos que acompañan la estrategia de crecimiento económico del país construida por el BID en diálogo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, Ecopetrol y algunas entidades privadas como FEDESARROLLO, el Consejo Privado de Competitividad, la ANDI, Cámaras de Comercio y el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Como se puede apreciar es una estrategia eco-

nómica que castiga a la clase asalariada, pues el aumento de los ingresos del Estado (calculados en un rango del 6%-9% del PIB) se soporta en un aumento impositivo, un detrimento de la política social, una reducción de los subsidios y una ampliación de los requisitos para obtener una pensión.

Así, más que una estrategia para dinamizar la movilidad social, lo que tenemos es un programa de política pública que pretende sostener y alimentar los procesos de acumulación de capital en el marco de un capitalismo en crisis.

3 Consuelo Ahumada-Beltrán et al., "Políticas sociales en la región andina: el caso de Colombia (2000-2007)", en *Papel Político*, Vol. 13 - No. 1, Bogotá, enero-junio de 2008, citado en ILSA (2009), "El BID en América Latina: 50 años reproduciendo la desigualdad". Bogotá, <http://ilsa.org.co:81/node/246>

El posicionamiento de estas propuestas en la actual coyuntura denotan las profundas dificultades a las que se enfrenta la sociedad colombiana para avanzar hacia la materialización de una paz estable y duradera con justicia social. En efecto, el Gobierno de Juan Manuel Santos sigue impulsado un paquete legislativo y un rediseño institucional que pretende ponerle talanqueras a la construcción de la paz y limitar el potencial transformativo que se puede desprender de los acuerdos alcanzados con la insurgencia de las FARC-EP en La Habana.

9

Esta propuesta del BID en tanto no se interroga por los factores reales generadores de pobreza ni problematiza el desigual sistema tributario ni propende por una reducción de los desequilibrios regionales, entre otros elementos, no contribuye a romper los elevados niveles de concentración de la riqueza (GINI del 0,54), por el contrario los profundiza. Y construye asociaciones causales equivocadas entre crecimiento económico y bienestar social.

Así, y siguiendo el planteamiento de un informe publicado por ILSA en 2009, se puede decir que esta institución a través de sus políticas

ha terminado por enriquecer al sector financiero nacional y transnacional, por apoyar la inversión extranjera directa e incrementar la deuda externa de los países latinoamericanos, por sobreexplotar su fuerza de trabajo y expropiar sus recursos naturales. La apertura económica en los mercados de bienes y capital, la competitividad, la inversión en los llamados "recursos humanos" y el acondicionamiento institucional y político requerido para garantizar los procesos de reproducción y acumulación del capital constituyen los fundamentos del reiterado discurso promovido desde el BID a partir del financiamiento de sus estudios, investigaciones y consultorías (ILSA, 2009).

El posicionamiento de estas propuestas en la actual coyuntura denotan las profundas dificultades a las que se enfrenta la sociedad colombiana para avanzar hacia la materialización de una paz estable y duradera con justicia social. En efecto, el Gobierno de Juan Manuel Santos sigue impulsado un paquete legislativo y un rediseño institucional que pretende ponerle talanqueras a la construcción de la paz y limitar el potencial transformativo que se puede desprender de los acuerdos alcanzados con la insurgencia de las FARC-EP en La Habana.

Por tanto, es fundamental que desde el movimiento social y popular se asuma la paz como un proyecto en disputa. El paro cívico nacional convocado por diversos procesos sociales para el próximo 17 de marzo es una expresión que camina en esta dirección. De estos ejercicios se deben generar las condiciones que permitan caminar hacia la articulación del movimiento social y de todas las trayectorias y dinámicas constituyentes que se vienen gestando en los territorios.



Paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977